

COLOMBIA:

LA CAPACIDAD MILITAR ES UNA FUNCION DEL TRABAJO DE MASAS

Entrevista a un dirigente nacional del M-19 de Colombia en febrero de 1979.

P— ¿Cuáles han sido las principales etapas del proceso represivo que vive el pueblo colombiano?

R— Desde hace 30 años, es decir, desde el asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, nuestro país se encuentra bajo el régimen de estado de sitio, con pequeños paréntesis. A raíz del acuerdo entre los dos partidos tradicionales, liberal y conservador, que establecieron desde 1958 el sistema de bipartidismo alterno (alternación cada cuatro años de liberales y conservadores en el gobierno), las clases dominantes y sus partidos han venido desgastándose, sin dar solución a los problemas vitales que afectan al grueso de la población colombiana. Ello los condujo a una pérdida progresiva de apoyo popular, que tuvo su punto culminante en la derrota que sufrieron los partidos de la oligarquía el 19 de abril de 1970, a manos de un movimiento popular que se expresó a través de la ANAPO (Alianza Nacional Popular). Vale la pena sin embargo anotar que, durante la década del 60, y en particular durante el gobierno de Guillermo León Valencia, y con la participación de asesores militares norteamericanos, se

bombardearon zonas campesinas controladas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pretendiendo con ello golpear el proceso de organización campesina que se gestaba, especialmente en las regiones de Huila y el Tolima.

— Más tarde se produjo, como lo conoce el pueblo latinoamericano, el sacrificio en combate del padre Camilo Torres, cuando recién se le había integrado a las fuerzas del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los sectores populares, en esta década, también fueron víctimas del atropello gubernamental, mediante el retroceso de conquistas obtenidas en duras luchas obreras y campesinas, como sucedió con la limitación del derecho de huelga, que hasta el año de 1966 era ilimitado y mediante el decreto 939 de este año, se redujo a un término perentorio de 40 días.

— Se aumentaron los requisitos para obtener las personerías jurídicas de las organizaciones gremiales y se liquidó físicamente a muchos de los dirigentes de las organizaciones estudiantiles nacionales.

— A partir de 1970, y en especial a raíz del triunfo popular en las urnas, que fue desconocido por el gobierno de Lleras al otorgar un triunfo popular espurio a Misael Pastrana Borrero, se produjo un reactivamiento de las luchas agrarias, especialmente en las zonas norte y suroccidental del país. Los años 71 y 72 presenciaron cerca de un millar de tomas de tierra por parte de asociaciones de usuarios campesinos y organizaciones indígenas. En el sector obrero, se produjo un intenso debate por el esclarecimiento de sus objetivos gremiales y políticos, sentándose las bases para acuerdos más serios que condujeran a la unificación de la clase obrera. Pero paralelo a este proceso de clarificación de los objetivos del campesinado y de la clase obrera, la burguesía era conciente de que su proyecto económico y político no podía desenvolverse dentro de un ambiente con las características señaladas, iniciándose así una contraofensiva, que en el gobierno de Misael Pastrana buscó aprovecharse de todas las prestaciones de todos los trabajadores colombianos mediante la creación de fondos regionales que buscaban canalizar esos

recursos para ser utilizados por los capitalistas en las nuevas inversiones, especialmente en el sector agroindustrial. Esta tentativa de expropiar las prestaciones de los trabajadores colombianos fue apuntalada más tarde con otras medidas, tomadas por el gobierno de Alfonso López Michelsen, quien, según sus propias palabras, gobernó sobre la base del "binomio Fuerzas Armadas-Corte Suprema de Justicia" y que culminaron con las medidas que, en materia laboral, pretendió establecer su Ministro de Trabajo con la famosa fórmula del salario integral, que buscaba mediante un acuerdo tripartito (patrones-Estado-trabajadores) acabar prácticamente con la capacidad de negociación de las organizaciones obreras y campesinas, que en nuestro país se conquistó con la heroica huelga de las Bananeras desde el año 1928.

Otro de los antecedentes que podemos mencionar, dentro de esta política de represión escalonada, es el famoso proyecto de convocar a una nueva constituyente, también durante el gobierno del señor López Michelsen, y que buscaba dar mayor poder a la justicia penal castrense y permitir, en lo económico, una mayor concentración de capitales y monopolización de la industria en unas pocas manos. Por eso, hoy podemos afirmar que el Estatuto de Seguridad dictado apenas a un mes de iniciado el gobierno de Turbay Ayala, es el hijo legítimo de la iniciativa de la Constituyente del señor López.

— Este proceso coincidente de una mayor concentración de la riqueza y la aguda represión de que viene haciendo gala el gobierno turbayista, no es casual; más bien, es coherente con el lema que agitó en su campaña electoral el señor Turbay, según el cual, "sin seguridad no hay desarrollo". Creemos incluso, que algunos sectores que hacen parte de la coalición gobernante se muestran preocupados con esta situación; ejemplo de ello es el reciente foro que sobre el problema de la concentración de la riqueza se llevó a cabo en el recinto mismo de la Cámara de Representantes, auspiciado por el presidente de esa corporación, Jorge Mario Eastman; foro éste que mostró indicadores alarmantes y que preocupan hoy a sectores democráticos del

país. Ahora bien, no de ahora, sino por su larga tradición de ligazón con los capitales norteamericanos, sabemos que los millones que se mueven en el sector de finanzas, el comercio y la industria, son compartidos ampliamente con las multinacionales y los grandes capitalistas, especialmente de origen estadounidense.

P— ¿Cuáles han sido, a su juicio, los sectores más afectados por la represión?

R— La represión se ha venido desenvolviendo en dos sentidos. Por un lado, mediante una política de recorte de los derechos fundamentales de las organizaciones obreras, campesinas y populares. Uno de los últimos decretos del gobierno de López Michelsen, estableció las exigencias de múltiples requisitos para la fundación de sindicatos y de organizaciones de los trabajadores. Los términos para las negociaciones colectivas del trabajo se han restringido; los funcionarios administrativos del trabajo, cuya función es la de velar por la defensa de los derechos de los trabajadores y de los sindicatos, tal como está consagrado en el código laboral, se han convertido prácticamente en funcionarios de policía al servicio de los patrones, como lo pudimos ver en el comportamiento de la mayoría de estos funcionarios durante largos y dolorosos conflictos de la caña, textiles (Vanytex), del magisterio y algunos más recientes, como los de Croydon, Chrysler y trabajadores petroleros.

— Por otro lado, se ha desatado una represión indiscriminada contra dirigentes obreros, campesinos, populares e indígenas. Para examinar sólo el mes de enero, es de público conocimiento que varios dirigentes del petróleo fueron detenidos en la ciudad de Barrancabermeja; miembros directivos de la Junta Directiva de Cartón Colombia, en el Valle, integrantes de la directiva del sindicato de las Sofasa-Renault. La detención de Rafael Tristanchó, secretario de propaganda de la Unión de Trabajadores

INTERNACIONAL

de Santander, y las persecuciones y detenciones constantes de que es víctima Isafas Tristancho, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Unión de Trabajadores de Colombia. Asimismo, durante el mes de diciembre del año pasado, decenas de obreros dirigentes de la CSTC, fueron detenidos en las principales ciudades. Durante el año 1978, 10 dirigentes indígenas fueron asesinados y, apenas hace 15 días, al norte del departamento del Cauca fue asesinado Benjamín Dindicué, ex-vicepresidente del CRIC. En noviembre del año pasado, apareció torturado y asesinado el antiguo dirigente del ELN, Pablo Martínez Quiroz. Por la misma época, fue asesinado en Bogotá Pedro Pablo Bello, miembro del Comité Central del Partido Comunista.

— Las organizaciones revolucionarias también hemos sido víctimas de la violenta represión desatada por el régimen, especialmente desde el momento de la expropiación de las armas del Ejército. Antes de ésta, en octubre del año pasado, las Fuerzas Armadas detuvieron a más de 100 personas, en una operación contra el Ejército Popular de Liberación; 37 de los detenidos pasaron a consejo de guerra que se desarrolla en este momento en Bogotá. Posteriormente, a comienzos del mes de diciembre, lanzaron un operativo contra las FARC en la ciudad de Bogotá y capturaron alrededor de 80 personas. En el mes de enero, luego de la expropiación de las armas, el operativo represivo se centró en el M-19; en el curso de 50 días, las detenciones suman más de 1.000, se ha recurrido a los allanamientos masivos, a la tortura, al asesinato, a la fabricación de pruebas acusatorias contra los detenidos y a la violación de los más elementales derechos humanos.

P — ¿Cómo caracterizaría la actual situación de la izquierda colombiana?

R — Paradjicamente, la violenta represión desatada por el régimen ha ge-

nerado a nuestro juicio una situación positiva, el acercamiento y la unidad de las fuerzas revolucionarias seriamente comprometidas en la lucha contra el sistema. Uno de los mayores vicios que habían afectado al movimiento revolucionario colombiano era el sectarismo, el dogmatismo y el esquematismo, pero hoy, ante la nueva situación planteada, vemos con satisfacción que las fuerzas más representativas buscan un acercamiento que creemos va a ser provechoso para el futuro político. El Partido Comunista viene desplegando una campaña por la defensa de la democracia, aspecto en el cual nosotros estamos plenamente de acuerdo y creemos que, con el concurso de fuerzas nuevas que han aparecido en el país y algunos sectores democráticos del liberalismo y del conservantismo, podemos generar un gran movimiento que por lo menos impida el establecimiento abierto de una dictadura militar. Nos preocupa el hecho de que algunos pequeños grupos sigan insistiendo en rencillas que tienen que ver con la situación del campo socialista a nivel internacional y que han afectado el proceso de unidad interna. Creemos que está llegando la hora de abordar con madurez la discusión sobre la incidencia que la situación del campo socialista tiene en la revolución latinoamericana en general y la colombiana en particular. En relación con los golpes recibidos por las organizaciones revolucionarias y el movimiento de masas, consideramos que, desde el punto de vista militar, se nos han propinado golpes de alguna envergadura. Los golpes sufridos por el EPL, las FARC y los que nos han afectado a nosotros, especialmente a partir de enero, nos obligan a un repliegue táctico, con el fin de buscar una rápida y ordenada reorganización de nuestras fuerzas. Desde el punto de vista político, consideramos que se ha producido un avance, en la medida en que los sectores populares obreros campesinos y marginados del país, se identifican cada vez más con sus organizaciones revolucionarias, lo cual, creemos, empieza a abrir las puertas para el desarrollo de un gran movimiento nacional que le salga al paso a la política reaccionaria y militar del régimen. En síntesis, podemos decir que nuestra capacidad de respuesta en lo militar va a depender en lo futuro de nuestra capacidad de movilización y organización política de las masas.

INTERNACIONAL

Sobre esto, creemos que las perspectivas son buenas en la medida en que hemos podido enraizarnos en las clases explotadas del país.

P — ¿Qué evaluación hace Ud. de la táctica del M-19 en el último período?

R — Ante el creciente proceso de militarización y de recorte de los más elementales derechos ciudadanos desde la misma instalación en el gobierno del señor Turbay, estamos llamando a todas las fuerzas sociales y políticas, democráticas y revolucionarias a dar una respuesta al proyecto político de los sectores más reaccionarios. Así fue como nos dirigimos a los sectores democráticos del liberalismo, a las personalidades democráticas no militantes, a los estudiantes, a la intelectualidad, al clero comprometido, para que adelantáramos una gran campaña tendiente a recuperar la democracia y el funcionamiento de sus derechos más fundamentales; a defender las organizaciones obreras y campesinas existentes en el país; a fortalecer el proceso de unidad obrera, traducido así fuera, apenas en lo reivindicativo, en el programa levantado por la Comisión Nacional Sindical que reúne a las 4 grandes centrales; a defender el salario y luchar por un aumento que estuviera de acuerdo con los exagerados aumentos en el costo de la vida. En síntesis, en este momento estábamos levantando la bandera de lucha por la democracia.

— Desde el punto de nuestra situación interna el período lo ubicábamos como el de acumulación de fuerzas que nos permitiera fortalecernos dentro de las masas populares. Sin embargo, con la verdad revolucionaria en las manos, tenemos que decir que no valoramos suficientemente las consecuencias que se desprenderían de la expropiación de armas que le hicimos al autodenominado "Ejército Nacional". Al subestimar la capacidad del enemigo y sobreestimar la nuestra, rompimos el marco de nuestras apreciaciones sobre la realidad del momento y creamos una

situación que aparentemente ha permitido que el enemigo se fortalezca, aunque toda la población sabe que es un fortalecimiento obtenido sobre la base de la persecución, la tortura, el asesinato y los allanamientos masivos. Esto nos obliga necesariamente a retomar la línea que habíamos defendido para este período y a proyectar nuestras acciones políticas militares dentro de ese contexto.

P — ¿Cómo considera usted que debe ser encarada la solidaridad internacional?

R — En Colombia, hoy, prácticamente han desaparecido los últimos vestigios de democracia burguesa. Por eso, nuestro pueblo queda casi indefenso ante las garras del militarismo. A diario, en el centro del país y en la costa norte, se conocen informes sobre personas que aparecen muertas en los campos y a orillas de las carreteras. En las ciudades, dirigentes obreros, revolucionarios y populares son encarcelados y violentamente torturados.

Los medios de comunicación de masas, como la radio y la televisión, sólo pueden expresar la opinión oficial del gobierno. La gran prensa nacional se autocensura, las opiniones políticas de oposición al régimen no pueden ser expresadas públicamente y órganos que tienen alguna pequeña capacidad de circulación, como *El Socialista* son allanados y clausurados. Esta situación nos obliga a hacer un llamado a las fuerzas democráticas y revolucionarias del mundo para que se inicie una gran campaña de solidaridad internacional con el pueblo colombiano. Para que se respeten los derechos humanos y el derecho a expresar opiniones políticas diferentes a las del régimen dominante. En cuanto a nuestro Movimiento, llamamos a difundir especialmente en América Latina los objetivos políticos que nos animan, con el fin de hacer más coincidente el esfuerzo para integrar la lucha a nivel continental.